

El control de cultivos de coca en el Perú

Repensando la erradicación y el control alternativo

Maritza Paredes¹, ²[Alvaro Pastor](#) y [Thomas Grisaffi](#)³

Introducción

Desde la prohibición internacional de drogas con la Convención Única de 1961, el Estado peruano ha buscado controlar la producción de cultivos de coca a través de campañas de erradicación forzosa, programas de desarrollo alternativo y el comercio legal de la coca. Históricamente, esta política ha tenido éxitos y retrocesos. Sin embargo, en los últimos años los resultados de la política de control de cultivos de coca parecen no haber logrado muchos avances. En el 2019, se reportan 54,655 hectáreas de coca a nivel nacional, una desaceleración no significativa del crecimiento de cultivos de coca respecto al año anterior (54,134 hectáreas) (DEVIDA, 2020a). Además, debido a la mejora de la productividad de la hoja de coca en las últimas dos décadas, se produce más drogas cocaínicas con una menor cantidad de hojas de coca (DIRANDRO, 2020). La estimación de 513 toneladas métricas de cocaína producida en el año 2019 (DEVIDA, 2020a) es similar a la cantidad producida durante la década de 1990 (UNODC, 2005: 35), situando actualmente al Perú como el segundo productor cocaína en el mundo (UNODC, 2021).

Junto a estas cifras, existe además la reconfiguración de la frontera cocalera a nivel nacional en 14 zonas productoras de hoja de coca, ubicadas en 137 distritos de 13 departamentos (DEVIDA, 2020a) (ver Mapa 1). Mientras que se ha ido reduciendo el volumen de hoja de coca en valles como el Alto Huallaga y el Monzón, otras áreas de la Amazonía peruana emergen como zonas de alta concentración de las actividades de la cadena productiva y comercial del mercado de drogas. El valle de los ríos Apurímac,

¹ Profesora Asociada del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP.

² Asistente de Docencia del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP

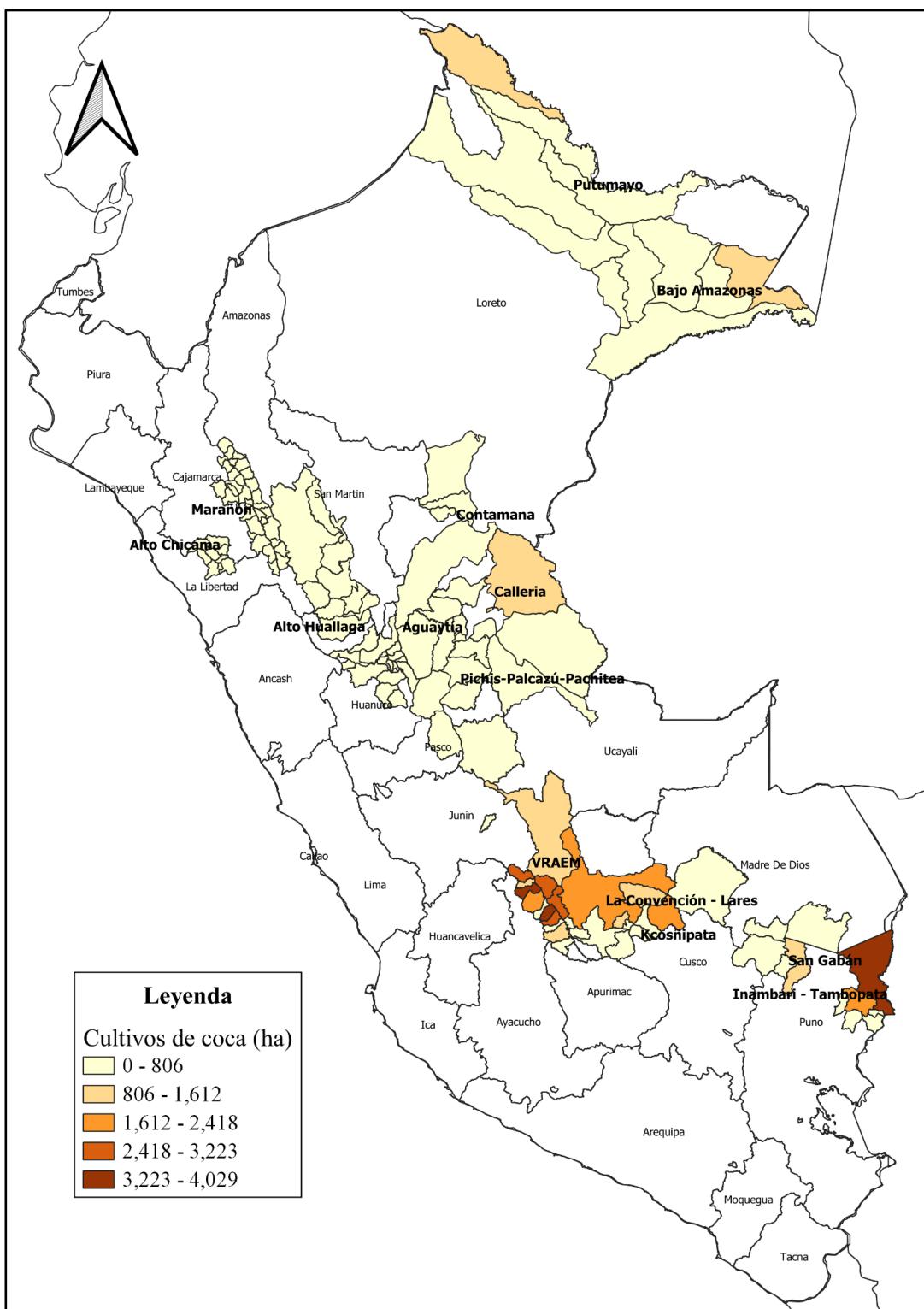
³ Profesor Asociado de la Universidad de Reading, Reino Unido

Ene y Mantaro (VRAEM) continúa siendo el principal productor de hoja de coca a nivel nacional desde el 2010, y se registra la expansión de la frontera cocalera hacia Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de Amortiguamiento, así como a territorios de Comunidades Indígenas (DEVIDA, 2020a; UNODC, 2018).

Adicionalmente, durante la crisis del COVID-19, la demanda global de cocaína se ha mantenido estable y las redes internacionales y locales de producción y tráfico de drogas se han adaptado a las restricciones sanitarias (UNODC, 2021). A nivel local, los recientes episodios de violencia sucedidos en el VRAEM, así como los asesinatos y amenazas a defensores(as) indígenas de la Selva Central, lejos de ser hechos aislados, dan cuenta de la capacidad que van acumulando los actores ilegales para ejercer y disputar el control territorial en ciertas áreas de la Amazonía. Todo ello no solo expresa que la política no está teniendo efecto, sino que además no otorga alternativas económicas sostenibles a las familias agricultoras, debilita la situación de seguridad de las familias y el poder del Estado y la democracia en el territorio.

En este contexto, se enmarca el Proyecto de Investigación “[Regional Applicability of Innovative Crop Control Policy in the Andes](#)”, con el objetivo de analizar el control de cultivos de coca en el Perú, poniendo énfasis en dos ejes analíticos: a) las relaciones entre autoridades estatales y organizaciones civiles, y b) los grados participación de estas últimas en la construcción de las políticas de control de cultivos de coca. Para ello se realizaron dos tipos de análisis: en primer lugar, un análisis comparativo entre Perú y Bolivia, con el objetivo de identificar cuáles serían los desafíos de implementar el modelo de control comunitario de coca boliviano a Perú. En segundo lugar, un análisis subnacional del caso del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), con el propósito de analizar las diferentes formas en que los actores locales se vinculan, resisten, desafían o colaboran con el accionar del Estado en el control de cultivos de coca.

Mapa 1. Superficie cultivada con coca a nivel distrital, año 2019 (hectáreas)



Fuente: Elaboración propia en base a DEVIDA (2020a).

A partir de los resultados y aprendizajes del Proyecto de Investigación⁴, el objetivo del presente documento es reflexionar sobre las implicancias de política pública en el control de cultivos de coca en el Perú. En lugar de plantear “balas de plata”, buscamos pensar las lecciones aprendidas y los desafíos existentes para contribuir a los esfuerzos enfocados en disminuir la pobreza y la desigualdad en el acceso a los servicios básicos y mejorar la participación de las organizaciones civiles en el ciclo de políticas del control de drogas en las zonas productoras de hoja de coca.

El documento se divide en cuatro secciones. Luego de la introducción, la segunda sección expone los desafíos para incorporar en la política peruana algunos elementos de la política boliviana basada en control comunitario de la coca. La tercera sección aborda tres grandes desafíos respecto al control de cultivos de coca en el Perú, vinculados a la erradicación de cultivos, los programas de desarrollo alternativo y a la expansión de la frontera cocalera hacia comunidades indígenas. Finalmente, en la sección 4 se proponen algunas reflexiones finales.

Los desafíos para un control comunitario de la coca en el Perú

Desde el 2006, el gobierno de Bolivia tomó la iniciativa de formular un modelo para limitar gradualmente la producción de coca de forma no violenta, participativa y sostenible. Este modelo ha permitido no solo limitar el crecimiento de cultivos de coca – a diferencia de sus contrapartes de Perú y Colombia –, sino también mejorar la calidad de vida y ampliar los derechos sociales y civiles de poblaciones marginadas (Farthing y Ledebur, 2015). Si bien sus resultados se han dado de manera desigual a lo largo del territorio boliviano (Bewer-Osorio, 2021), el modelo ha sido reconocido a nivel internacional como un enfoque de reducción de la oferta de drogas menos represivo y con el potencial de ofrecer alternativas económicas a las familias agricultoras (UNDP, 2019: 9).

A partir del año 2019, diversos factores posibilitaron la iniciativa para evaluar las posibilidades de aplicar el control comunitario de hoja de coca de Bolivia en Perú. En primer lugar, se iniciaron relaciones bilaterales entre ambos países, que fueron

⁴ En total se han elaborado cuatro artículos académicos, dos recientemente publicados (Grisaffi et. al, 2021; Paredes y Pastor, 2021) y dos pendientes de publicación.

percibidas como una oportunidad estratégica por sectores de los sindicatos cocaleros de Perú. En segundo lugar, la Unión Europea (UE) planteó como objetivo explorar la posibilidad de adaptar el modelo de control comunitario al Perú. A partir de entonces, se realizaron diversos intercambios de experiencias entre las autoridades de la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y su contraparte boliviana; estudios para evaluar el mercado legal de la coca en Perú, financiados por la UE; y dos delegaciones del sur del VRAEM, una de la región de la Selva Central y otra del Alto Huallaga visitaron y se reunieron con autoridades y agricultores de Bolivia. Sin embargo, ese mismo año, las acciones de erradicación tanto en Puno como en la zona de Mazamari del VRAEM terminaron en enfrentamientos entre las autoridades y los agricultores, minando las posibilidades de diálogo para medidas alternativas a la erradicación forzosa.

En este contexto, en el artículo “[From criminals to citizens: The applicability of Bolivia's community-based coca control policy to Peru](#)” (Grisaffi et al., 2021), identificamos cuatro dimensiones claves que son necesarias fortalecer para que el control comunitario de la coca tenga alguna posibilidad de éxito en el Perú. En primer lugar, la *cohesión social* de las estructuras sindicales cocaleras, esto es, su capacidad para autogestionarse, y limitar los niveles de cultivos de coca entre sus miembros de base. El sindicato cocalero del Chapare tiene una larga trayectoria de desarrollo de formas de auto-gobierno que han sido claves para que el modelo de control comunitario funcione. Su capacidad organizativa les ha posibilitado mantener los límites del cultivo de coca del modelo⁵ y participar en diferentes instancias del gobierno a nivel nacional, capacidad que se refuerza por un sentido de identidad colectiva (Grisaffi, 2019). Por otra parte, los sindicatos cocaleros peruanos tienen una trayectoria caracterizada por la fragmentación interna y la poca capacidad de generar una agenda política y un partido político unificado a nivel nacional (Durand-Ochoa, 2014). Al mismo tiempo, identificamos que, en el caso del VRAEM, el sindicato cocalero presenta desafíos para empadronar y exigir límites a sus miembros de base para controlar la producción excedente de coca, a la par que no ha desarrollado un brazo político sólido, ni mucho menos se ha articulado a otras organizaciones sociales del ámbito rural.

En segundo lugar, *la confianza en el Estado* que tienen los sindicatos cocaleros. En el caso de Bolivia, la capacidad del sindicato cocalero de transitar del espacio local

⁵ En Bolivia se autoriza el cultivo de coca en un área denominada *cato*, aproximadamente de 1,600 m2.

al escenario político nacional posibilitó que sus líderes y miembros de base participen y trabajen en diferentes instancias del ciclo de la política de control comunitario a nivel nacional y subnacional. Además, los miembros de base expresan una fuerte confianza en las autoridades estatales respecto a la implementación de programas de desarrollo rural e industrialización de la hoja de coca. Los cocaleros eran los encargados de las agencias como UDESTRO que implementan el desarrollo rural y la racionalización de los cultivos de coca. Esto significó que realmente podía haber un diálogo entre los agricultores y el Estado, a un nivel muy local y en igualdad de condiciones. Por su lado, en el Perú, los ciclos reiterativos de campañas de erradicación y protestas de los diferentes sindicatos cocaleros han minado la relación entre aquellos y las autoridades del gobierno central encargadas del control de la coca. De acuerdo a la visión de los cocaleros del VRAEM, las constantes mesas de diálogo han servido para mitigar el incremento de conflictos sociales, pero no se han traducido en acciones concretas respecto formular alternativas al control de la coca más allá de la erradicación forzosa, ni tampoco en una participación directa del sindicato cocalero en la política pública. La percepción de gran parte de los cocaleros del VRAEM es que el gobierno intentará erradicar la coca sin algún tipo de diálogo previo.

En tercer lugar, *la complementariedad de las políticas públicas*. En el caso de Bolivia, el control comunitario de la coca se enmarca en un conjunto de reformas económicas estructurales. El gobierno boliviano planteó un “desarrollo con coca” a partir de la industrialización de la hoja de coca y la búsqueda de mercados para estos productos. En paralelo, enfatizó la redistribución de las regalías de las industrias extractivas a sectores marginales, la inversión en servicios sociales y la titulación de tierras y la diversificación de las economías de las familias cocaleras para progresivamente reducir la dependencia a los cultivos de coca (Farthing y Ledebur, 2017: 161). En el caso peruano, el mercado legal a través de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) tiene limitaciones operativas y legales que contribuyen a que no logre abastecer a la demanda nacional de consumo tradicional e industrial de hoja de coca, por lo que más del 90% pasa por canales informales para su uso tradicional y/o industrial, y, la gran mayoría se destina a la producción de drogas ilícitas (DEVIDA, 2020b: 36).⁶ Por su lado, el desarrollo agrario ha estado orientado por una agenda que

⁶ En el Perú existen alrededor de 6 millones de personas que consumen hoja de coca a nivel nacional. Se estima que la cantidad empleada para el consumo tradicional (chacchado, ceremonial) es de 9,559

prioriza la agro-exportación, en donde las zonas cocaleras se caracterizan por la inseguridad en la tenencia de la tierra, la marginación étnica y las deficientes infraestructuras, que incrementan los costos del acceso a los mercados regionales, nacionales e internacionales (Mendoza y Leyva, 2017). Actualmente, durante la pandemia, el sector agrario peruano ha entrado en crisis dado sus bajos niveles de productividad y la reducción de los ingresos para las familias agricultores (Zegarra, 2021), acrecentando las posibilidades de la inseguridad alimentaria y/o que las familias opten por el cultivo de coca como una estrategia de subsistencia.

En cuarto lugar, *las coaliciones internacionales* en la lucha contra las drogas. El gobierno boliviano optó por replantear sus coaliciones políticas con aliados internacionales en el marco de la guerra contra las drogas. Su vinculación con la Unión Europea contribuyó a la mejora tecnológica del sistema de monitoreo del comercio legal de la coca e incentivar la inversión en desarrollo rural sin condicionamientos. Por su parte, si bien el gobierno peruano también ha diversificado sus coaliciones internacionales en la lucha global contra las drogas, aún mantiene cierta alineación con la agenda norteamericana que tiende a priorizar objetivos inmediatos como la reducción de coca a través de la erradicación forzosa (Ponce, 2016; Koven y McClintock, 2018). Esto se expresó claramente en el año 2019, mientras que diferentes autoridades del gobierno peruano evaluaban la posibilidad de implementar el modelo de control comunitario de Bolivia con el apoyo de la Unión Europea; en paralelo, las mismas autoridades, apoyaron las campañas de erradicación forzosa. Estas últimas fueron reconocidas por la Embajada de Estados Unidos como importantes avances en la lucha antidrogas, pese a que conllevaron a dos agricultores fallecidos en Puno y heridos en el VRAEM (Ledebur y Grisaffi, 2019). El alineamiento con esta agenda, y las presiones que ejerce los Estados Unidos para el control de cultivos en la región andina, supone un gran desafío para que emergan otras opciones de política pública más sostenibles y menos conflictivas.⁷

Argumentamos que, si bien este modelo no ha detenido el tráfico ilícito de drogas en Bolivia y tiene alcances desiguales en su territorio⁸, algunos elementos

toneladas métricas (INEI, 2019), lo que representa el 7% del total de hoja de coca producida a nivel nacional en el 2019 (132,813 toneladas métricas) (DEVIDA, 2020a).

⁷ Para una reflexión sobre las coaliciones políticas internacionales antidrogas a partir del caso de Colombia ver (Acero y Machuca, 2021).

⁸ Ver Grisaffi (2019) y Brower-Osorio (2021).

identificados del programa de Bolivia pueden ser importantes para repensar el diseño de políticas de control de cultivos de coca más allá de la inercia institucional que ha marcado la lucha contra las drogas en el Perú. Trabajar en la cohesión social de las organizaciones civiles, la confianza en el Estado y la complementariedad de las políticas públicas pueden ser elementos que tienen el potencial de reducir gradualmente los cultivos de coca en donde se procure disminuir los daños hacia las familias agricultoras a la par de reconocerlos como ciudadanos, incentivando su participación pública y ofreciéndoles alternativas económicas realistas.

Repensar la política en el Perú: erradicación, desarrollo alternativo y comunidades indígenas.

Desafíos en la erradicación de cultivos de coca

La erradicación de cultivos de coca en el Perú ha tenido una aplicación heterogénea a nivel subnacional en el periodo 2001-2019. Zonas cocaleras como el Alto Huallaga – Monzón, Aguaytía y Pichis-Palcazú han sido constantemente sujetas a campañas de erradicación forzosa, mientras que en áreas como San Gabán (Puno) y Bajo Amazonas (Loreto) ha sido más intermitente, respondiendo a los crecimientos del cultivo en estas áreas. Mientras que, en el VRAEM, el principal valle productor de hoja de coca, la erradicación ha sido prácticamente inexistente, con un resultado de 117 hectáreas de coca erradicadas y tres campañas suspendidas (2001, 2014 y 2019). En este escenario, en el artículo “[Erradicación en suspenso: La dimensión simbólica de la pacificación negociada en el VRAEM](#)” (Paredes y Pastor, 2021), nos preguntamos qué explica la implementación heterogénea de la erradicación de cultivos de coca en el VRAEM. Para ello, partimos de entender que la suspensión de la erradicación en el VRAEM, en lugar de mostrar una ‘falta de capacidad estatal’, expresa más bien las formas complejas en que los Estados negocian su presencia legítima con los actores locales civiles en zonas de economías ilícitas.

A partir de un análisis histórico y etnográfico, identificamos que, durante el Conflicto Armado Interno (CAI) – el primer boom de la coca en el VRAEM –, las fuerzas militares toleraron que los actores civiles organizados en Comités de

Autodefensa cultiven y comercialicen hoja de coca y pasta base con el objetivo de contar con su colaboración en el control de la lucha contrainsurgente. Este relacionamiento histórico con los actores locales tiene efectos en los posteriores procesos emprendidos por el Estado para controlar la economía cocalera en el valle. En cada intento de erradicación, los agricultores cocaleros organizados en la Federación de Agricultores Agropecuarios del VRAE (FEPAVRAE) – cuya matriz organizativa se funda en los Comités de Autodefensa – han reivindicado estas ‘alianzas’ forjadas en el pasado. En sus asambleas, movilizaciones y anuncios públicos reivindican que el Estado peruano pudo lograr un relativo orden social en el valle gracias a la organización de los agricultores y el rol de la economía cocalera.

Los intentos de erradicación han planteado la amenaza de debilitar la frágil presencia y capacidad estatal alcanzada en el territorio post CAI. Ello, sumado al contexto nacional de alta conflictividad social por otras causas (Paredes, 2019), ha conllevado a que las autoridades estatales de nivel central suspendan consecutivamente los intentos de erradicación en el VRAEM. Esto no debe entenderse necesariamente como un ‘fracaso’ de la política antidrogas, dado que la evidencia sugiere que la erradicación de cultivos de coca no ha sido exitosa en los territorios en donde se ha aplicado. Desde el punto de vista de los agricultores(as) cocaleros del VRAEM, su resistencia a la erradicación es una forma momentánea de evitar las consecuencias que saben que - y la literatura ha identificado - han sucedido en otras zonas productoras erradicadas: la afectación directa al acceso a medios de vida (Grillo, 2018); entrar en ciclos reiterativos de erradicación y resiembra (DIRANDRO, 2020) y desplazamiento de cultivos hacia zonas más biodiversas (Salisbury y Fagan, 2013); la fragmentación y criminalización de las organizaciones de base (Heuser, 2017; Grillo 2018, van Dun, 2012); y el aumento de los episodios de violencia por parte de actores ilegales (van Dun, 2014; Proetica, 2021).

Las organizaciones sociales de base del VRAEM buscan plantear salidas negociadas con el Estado y reconocen que es necesario limitar el crecimiento de los cultivos de coca, pero buscan hacerlo a través de medidas que eviten una escalada de violencia en la zona. Sin embargo, los intentos de erradicación, socavan todo intento de construir formas alternativas al control de la coca. Lejos de pensar estas resistencias como una oposición al Estado, hay que entenderlas como una forma de defender sus

medios de vida y de exigir una mayor presencia del Estado para la seguridad y el desarrollo rural de estas zonas.

La población cultivadora de coca ha sido históricamente criminalizada y estigmatizada por discursos que los asocian al terrorismo y al narcotráfico⁹, pese a que sus organizaciones de base, como los Comités de Autodefensa, continúan siendo actores claves en la contención y respuesta a las actividades criminales a nivel local (Heuser, 2019). Una lideresa cocalera nos comentaba que “*hemos pasado a ser catalogados de héroes de la nación a narcoterroristas*”, dando cuenta de las distancias existentes entre las autoridades de nivel central, la opinión pública capitalina y las familias agricultoras del VRAEM. La confianza ciudadana en el Estado, así como la capacidad organizativa de la sociedad civil para generar sinergías con el Estado en el control de actividades ilícitas, son elementos importantes para repensar la erradicación de cultivos de coca, en lugar de enfocarse únicamente en indicadores operativos tales como la cantidad de hoja de coca erradicada y la cantidad de cocaína producida evitada por erradicación.¹⁰

Desafíos en el Desarrollo Alternativo

Los programas de Desarrollo Alternativo (DA) son la estrategia para reducir la dependencia de las familias agricultoras a los cultivos ilícitos a través de proyectos de desarrollo rural. Sin embargo, a nivel global, la tendencia ha sido priorizar la reducción a corto plazo de los cultivos ilícitos a través de la erradicación, sobre el bienestar de los agricultores y sus familias (Alimi, 2019). Adicionalmente, estos programas tienen ciertas limitaciones para proporcionar medios de vida alternativos, principalmente porque la política prohibicionista de drogas aumenta el precio de los cultivos ilícitos, mientras que las reformas de libre mercado han contribuido a reducir los precios de cultivos lícitos y flexibilizar las condiciones laborales en el sector agrario (Buxton, 2020).

Los desafíos del desarrollo alternativo en países como Perú y Colombia se derivan de la escasa capacidad de complementarse con otras políticas públicas que

⁹ Ver Ferreira (2016) y Heuser (2019)

¹⁰ Ambos indicadores forman parte de la medición de los avances de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.

aborden las causas estructurales del cultivo de coca: la falta de seguridad en la tenencia de la tierra, la marginación étnica y de género, y las deficientes infraestructuras que impiden el acceso a los mercados (Nacimiento, 2016; Acero, Parada y Pérez, 2019). La búsqueda de integrar a los agricultores pobres en mercados nacionales e internacionales altamente competitivos se ha realizado en base a estrategias limitadas orientadas a la especialización de unos cuantos cultivos legales pero sin estrategias más integrales de desarrollo y articulación agrícola y con diseños institucionales escasamente participativos (Marín, Pérez y Acero, 2020; Buxton, 2015). Pese a estos grandes desafíos, continúa siendo una estrategia apoyada por actores políticos globales como las Naciones Unidas, los Estados Unidos, y la Unión Europea en el marco del régimen internacional de lucha contra las drogas (Brombacher y David, 2020).

En el Perú, inicialmente los programas de Desarrollo Alternativo se ejecutaban a través de ONG's internacionales y nacionales, con el financiamiento de la cooperación internacional y las coordinaciones burocráticas de DEVIDA. Conforme el Perú se convirtió en país de renta media, a partir del 2007 en adelante, se planteó el Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (PIRDAIS), a cargo de DEVIDA, cuyo financiamiento proviene principalmente de los recursos del Estado peruano (DEVIDA, 2017). El PIRDAIS ejecuta los proyectos a través de la transferencia financiera a gobiernos locales (municipios) y por medio de ejecución directa por parte de DEVIDA. Ambas formas de intervención están enfocadas en ejecutar proyectos para mejorar y ampliar el cultivo de cacao, café y aceite de palma, así como el apoyo a la infraestructura vial local y el fortalecimiento de los gobiernos locales.

Estos programas se han aplicado de manera heterogénea a lo largo del territorio nacional, con una larga priorización en los valles del Alto Huallaga y el Monzón durante los fines de 1990 y la primera década del 2000. Si bien las autoridades nacionales sostienen que ambos casos demuestran el ‘éxito’ de la estrategia antidrogas, en el artículo co-autorado, “*Addressing Socio-Environmental Challenges and Unintended Consequences of Peruvian Drug Policy: An Analysis in Two Former Cocalero Valleys*” (Grillo, Kendra, Pastor y Manrique, 2021), la evidencia etnográfica sugiere que la transición a las economías legales agrarias en lugar de aliviar la inseguridad alimentaria y económica que generaron las intensas campañas de erradicación a las familias más empobrecidas, contribuye a reproducir desigualdades

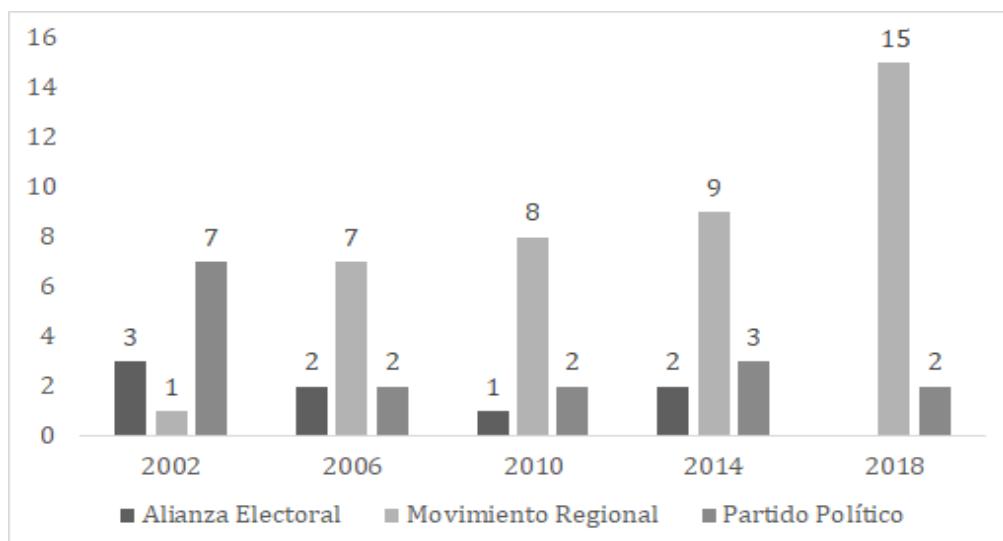
previamente existentes vinculadas las limitantes para acceder a tierras productivas y al capital necesario para invertir en los cultivos. Asimismo, conduce a las y los agricultores más empobrecidos a un ciclo de erradicación-replante o a optar migrar hacia otras zonas productoras de coca. Estos hallazgos hacen necesario repensar los desafíos de mantener estas transformaciones de los territorios locales, así como sus consecuencias no buscadas sobre el medioambiente a través de la ampliación de la frontera agrícola industrial lícita (MINAM, 2016: 45), así como de los cultivos de coca hacia zonas más remotas y biodiversas.

En el caso específico del VRAEM, en cada suspensión de la erradicación (2002, 2014 y 2019), las negociaciones culminaron decidir reducir gradualmente los cultivos de coca a través de programas de desarrollo alternativo. Sin embargo, hasta el año 2018, las acciones de DEVIDA fueron limitadas, cuya operación se realizaba desde la ciudad de Huamanga, a 6 horas del VRAEM en auto. A partir de dicho año, bajo la dirección de DEVIDA, se plantea el Plan Multisectorial VRAEM 2021 con el objetivo de reducir las brechas de acceso a servicios básicos, mejorar la productividad y encadenamiento productivo de los cultivos lícitos, diversificar las economías locales y fortalecer a las autoridades municipales (DEVIDA, 2018). Asimismo, DEVIDA posicionó sus oficinas descentralizadas en la ciudad de Pichari, el centro urbano del VRAEM, así como en la zona sur (distrito de Anchihuay) y la zona norte (distrito de Mazamari) para hacer un trabajo más directo a nivel local. Ello supuso un gran avance para esta política, pero el anuncio y apoyo de la erradicación de cultivos de coca en el año 2019 por parte de las autoridades estatales de nivel central, sumado a la gran desconfianza que tienen los cocaleros hacia agencias como DEVIDA, conllevaron a un escenario de negociaciones y resistencias hacia estos programas.

En el artículo “*Coca Illicit Crops and Hidden Strategies of Resistance to Alternative Development in Peru*” (Paredes, Grisaffi y Pastor, forthcoming) se buscó comprender cómo los actores locales experimentan, resisten, desafían o colaboran con el accionar del Estado en el despliegue de programas de Desarrollo Alternativo a nivel local en el escenario post intento de erradicación. Usualmente se considera que las zonas productoras de coca son áreas aisladas y débilmente articuladas al mercado y las reformas políticas nacionales. Sin embargo, el control de los cultivos de coca se da junto con la expansión de otras dinámicas nacionales y globales que impactan en las dinámicas políticas locales de las zonas cocaleras.

Por un lado, con la expansión de la descentralización política, los cocaleros organizados en la FEPAVRAE han participado en la política local, incluso asumiendo cargos municipales a nivel distrital. Desde el 2006 en adelante, los movimientos regionales han ganado mayor presencia en los municipios distritales, mientras que los partidos políticos nacionales la han perdido (ver Gráfico 1). Estas agrupaciones políticas locales han estado vinculadas de alguna manera a la FEPAVRAE, los candidatos que presentaban eran dirigentes actuales o ex dirigentes del sindicato cocalero y/o recibían el apoyo de sus miembros de base. Sin embargo, esta organización civil no ha sido capaz de generar un partido regional único debido a las tensiones internas y al personalismo de sus líderes locales, ni mucho menos escalar a nivel nacional como su contraparte boliviana (Durand-Ochoa, 2014).¹¹ No obstante, en este artículo sugerimos que ha habido a través de estos procesos la emergencia de ‘alcaldes cocaleros’ que se vuelven en mediadores importante entre los actores del Estado Central y el gremio de agricultores.

Gráfico 1. Número de alcaldes distritales elegidos según el tipo de organizaciones políticas (2002-2018)

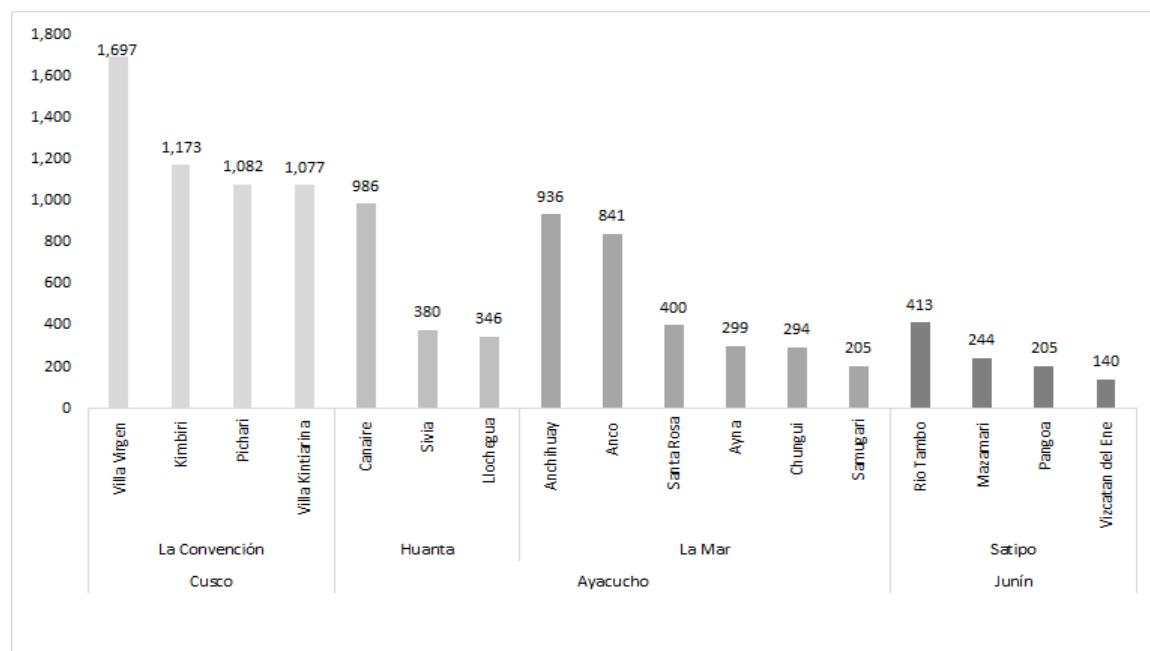


Fuente: Elaboración propia en base a Infogob (S.F).

¹¹ En la elección del 2018, 15 municipios distritales fueron obtenidos por 6 diferentes movimientos regionales.

Por otro lado, la expansión de las industrias extractivas en algunas zonas del VRAEM, y las nuevas fuentes de ingresos para los municipios provenientes de estas industrias a través del canon (50% del Impuesto a la Renta que se distribuyen entre los gobiernos subnacionales de extracción), han creado desigualdades entre los distritos en cuanto a sus recursos públicos. Los municipios distritales del área de intervención directa del Gas de Camisea, ubicados en la provincia de La Convención (Cusco) tienen mayor presupuesto público per-cápita que aquellos municipios fuera de esta área (Satipo, Junín; Huanta y La Mar, Ayacucho) (ver Gráfico 2). Como consecuencia, los municipios más pobres carecen de infraestructura básica y tienen los niveles más altos de población con al menos una necesidad básica insatisfecha (ver Gráfico 3). Mientras que municipios como el de Pichari han empleado las rentas del canon para financiar proyectos de infraestructura, el acceso a servicios básicos e incluso realizar proyectos agrícolas de pequeña escala (Vizcarra, 2018). Precisamente, estos últimos municipios, al tener una relativa mayor capacidad de gasto público, no dependen exclusivamente de los fondos del Desarrollo Alternativo para financiar sus obras públicas de desarrollo agrario.

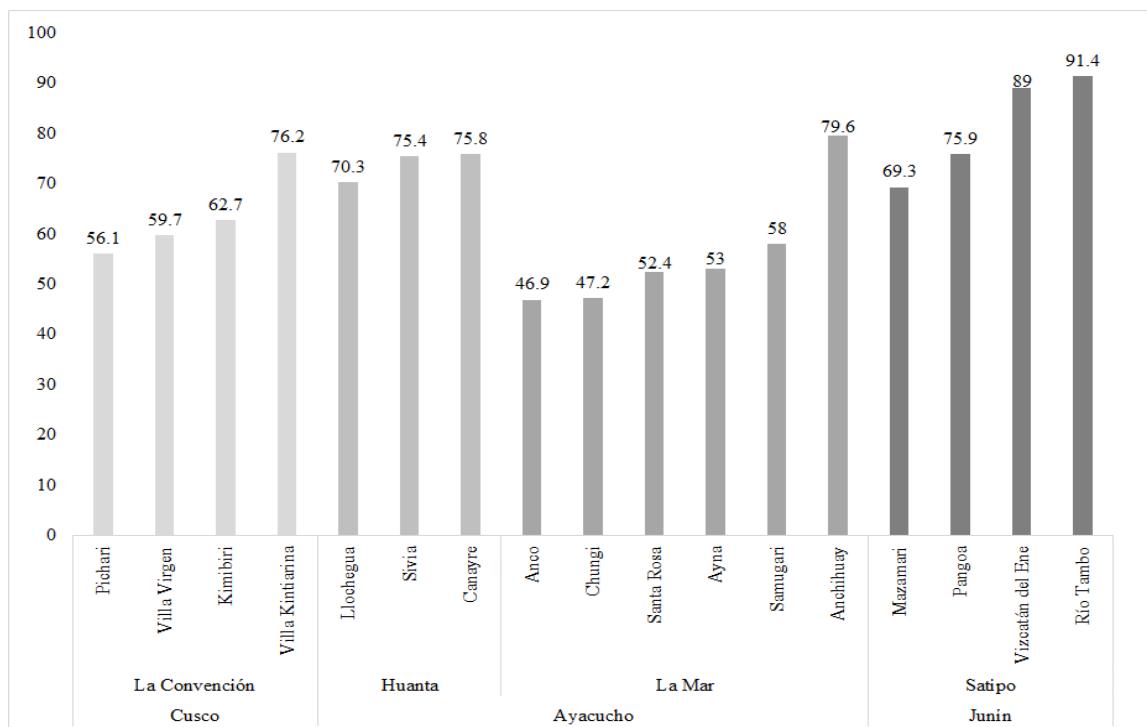
Gráfico 2. Presupuesto per cápita de los municipios de distrito en el VRAEM (en



dólares de 2019)

Fuente: Elaboración propia en base a MEF (2019) e INEI (2020).

Gráfico 3. Porcentaje de población con al menos una necesidad básica insatisfecha a nivel de distrito del VRAEM (año 2017).



Fuente: Elaboración propia en base a INEI (2017).

Los cocaleros están interesados en minimizar el conflicto y evitar la erradicación de la coca, por lo que rara vez llevan sus críticas sobre el Desarrollo Alternativo a la arena pública con las agencias centrales del Estado, ni se movilizan abiertamente para desafiar a estos programas del Estado central. Sin embargo, esto no significa que acepten acríticamente la visión de desarrollo del Estado central. Usando el marco analítico de James Scott 'Hidden Transcripts' (Scott 1995), hemos identificado que hay formas de resistencia más cotidianas a través de sus reuniones y asambleas en donde también suelen participar los alcaldes municipales. En estos espacios, los líderes de la organización cocalera buscan influir en los alcaldes municipales del VRAEM con menos recursos públicos para que no acepten los acuerdos de Desarrollo Alternativo que ofrecen agencias del estado central como DEVIDA.

Desde el punto de vista de los cocaleros, consideran que los programas de desarrollo alternativo buscan dirigir fondos a los alcaldes de los municipios más empobrecidos, ofreciéndoles proyectos y servicios públicos a cambio de que suscriban un convenio que apoye los objetivos nacionales de la lucha contra las drogas. Para los

líderes cocaleros, esto último supone una posibilidad para iniciar la erradicación de la coca y, por tanto, la pérdida de su principal fuente de ingresos. Por su parte, los alcaldes de estos distritos con mayores brechas socio-económicas y menor capacidad de gasto público, consideran que estas presiones potencialmente limitarían la inversión pública en servicios básicos requeridos por la población local.

En esta situación, subyace una fuerte desconfianza hacia las entidades del Estado que contribuye a que la implementación de los programas sean experimentados por los líderes cocaleros más como un mecanismo de control social y potencial amenaza de erradicación que una vía hacia el desarrollo y el bienestar de sus comunidades y familias. En ese sentido, estas dinámicas de negociación no son ‘espacios de empoderamiento’, sino más bien refuerzan la trayectoria de luchas internas en el sindicato cocalero y refuerzan la desconfianza de cierto sector de la sociedad civil hacia el Estado local y central, elementos que podrían utilizarse para desarrollar soluciones no violentas para disminuir los cultivos ilícitos (Grisaffi et al., 2021).

Estas economías alternativas no han ofrecido opciones seguras y sostenibles en el tiempo para las familias agricultoras y el medio ambiente. La forma en que se siguen planteando estos programas responde a la inercia estructural orientada a la agro-exportación; es decir, crear nichos locales de commodities globales para posicionarnos en el mercado internacional. Si bien ha habido avances en los proyectos de Desarrollo Alternativo, la evidencia sugiere que esta transición conlleva a la emergencia de nuevas formas de vulnerabilidad relacionadas al difícil acceso a tierras productivas y el capital necesario para invertir en estas tierras, y a la inserción marginal a mercados laborales de la agroindustria u otros sectores de servicios mal remunerados (sobre todo en el caso de las mujeres) (Meehan, 2021; Parada y Marín, 2021; Grillo et. al, 2021).

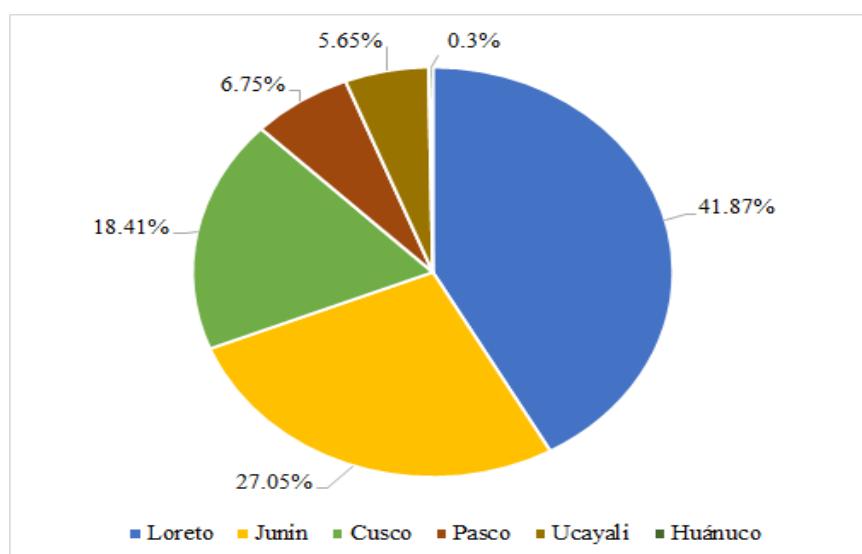
Adicionalmente, los territorios Amazónicos de las zonas productoras de coca son áreas cuyos suelos son de protección y una mínima parte son tierras aptas para cultivos (Mendoza y Leyva, 2017), llevando la posibilidad de generar cambios en la cobertura boscosa por la promoción de cultivos exportables en pequeña y gran escala (MINAM, 2016). A ello hay que sumarle la crisis general de la agricultura en un país dependiente de la industrias extractivas como el Perú en donde se ha privilegiado la importación de alimentos y se ha invertido muy poco en fortalecer la agricultura local y su comercialización (Thorp y Paredes, 2011), la débil conectividad vial y tecnológica que persiste en la Amazonía peruana, y el sistema comercial caracterizado por

intermediarios especuladores, una débil industrialización de los productos agrícolas y bajos niveles de asociatividad entre agricultores (Mendoza y Leyva, 2017). Todo ello invita a repensar el Desarrollo Alternativo en un país dependiente de las industrias extractivas y en un contexto de crisis agraria a nivel nacional (Zegarra 2021).

Desafíos para abordar la expansión de la frontera cocalera en comunidades indígenas Amazónicas

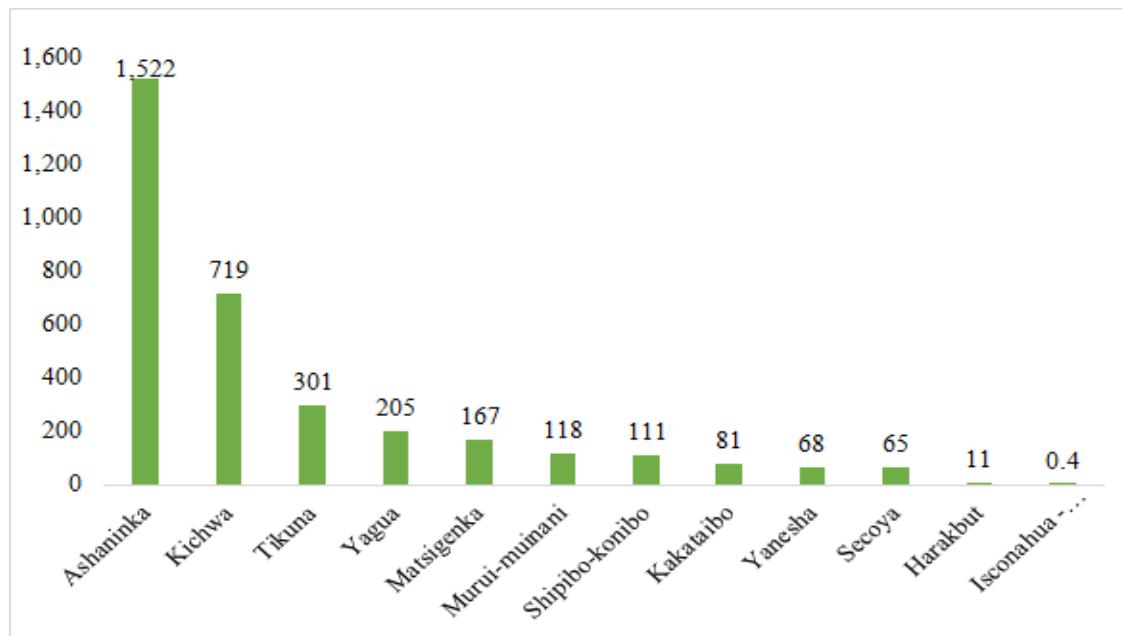
En los últimos años, los cultivos de coca se han expandido a los territorios de las comunidades indígenas Amazónicas del país. En el año 2017, se registró un total de 3,368 hectáreas de cultivos de coca en territorios de comunidades indígenas amazónicas a nivel nacional, un aumento del 22% respecto al año anterior (2,759 hectáreas de coca) (UNODC, 2018). De acuerdo a las cifras, existen alrededor de 132 comunidades indígenas Amazónicas que registran cultivos de coca, ubicadas principalmente en las zonas del Putumayo y Bajo Amazonas (Loreto), el VRAEM (Junín y Cusco) y la Selva Central (Pasco, Ucayali y Huánuco) (ver Gráfico 4). Asimismo, los Pueblos Indígenas con mayor cultivo de coca en sus territorios durante el 2017 son los Ashaninkas (1,522 ha), seguido de los Kichwa (719 ha) y los Tikuna (301 ha) (UNODC, 2018) (Gráfico 5).

Gráfico 4. Porcentaje de la superficie cultivada total en territorios de comunidades indígenas Amazónicas según región Amazónica, año 2017



Fuente: Elaboración propia en base a UNODC (2018).

Gráfico 5. Superficie cultivada total en territorios de comunidades indígenas Amazónicas según Pueblo Indígena, año 2017



Amazónicas según Pueblo Indígena, año 2017

Fuente: Elaboración propia en base a UNODC (2018).

En los años recientes, las autoridades competentes no han publicado información sobre la situación actual de los cultivos de coca en estos territorios. Sin embargo, a raíz de diferentes denuncias de líderes indígenas tanto del VRAEM como de la Selva Central, se ha podido constatar que la ampliación de la frontera cocalera y la presencia de actores ilegales han continuado durante la pandemia (CAAP, 2021). En el caso específico del VRAEM, diferentes líderes de federaciones indígenas Ashaninkas de los ríos Ene y Tambo denunciaron públicamente las invasiones de sus territorios por parte de colonos cocaleros y exigían la presencia de las autoridades estatales durante el año 2019. Estas últimas han seguido la tendencia de ejecutar campañas de erradicación de cultivos de coca y posteriores proyectos de desarrollo alternativo en los territorios de las comunidades indígenas Amazónicas.

En el artículo “*Coca Illicit Crops and Hidden Strategies of Resistance to Alternative Development in Peru*” (Paredes, Grisaffi y Pastor, forthcoming), también buscó explorar cómo es que la población Ashaninka del VRAEM y sus federaciones

experimentan y reaccionan al despliegue estatal en el control de la coca en sus territorios. Identificamos que, por un lado, los presidentes de federaciones indígenas consideran que es necesario detener el crecimiento de los cultivos de coca en las comunidades y expulsar a los colonos invasores, por lo que, una de sus estrategias es articularse con agencias estatales que generen acciones concretas para frenar los cultivos de coca. Por otro lado, comuneras y comuneros Ashaninkas perciben a la erradicación como una intervención impuesta que pondría en riesgo el acceso a sus medios de subsistencia y aspiraciones de consumo a través del cultivo de coca a pequeña escala (entre 1 hectárea a menos). Adicionalmente, perciben que los programas de Desarrollo Alternativo promueven cultivos que requieren inversiones de capital que no disponen, y tienen mercados limitados con precios y niveles de productividad bajos.

La población Ashaninka que encuentra en el cultivo de la coca una opción para articularse a las economías de mercado más amplias exige tanto a sus líderes como a las autoridades estatales procesos participativos más amplios, como la consulta previa, y la mejora de los deficientes servicios básicos que caracterizan a sus comunidades, antes de firmar cualquier convenio con entidades estatales. Sin embargo, las tensiones entre los líderes de federaciones indígenas y sus bases comunitarias en el escenario de negociación contribuye a fragmentar y debilitar a la organización indígena para la generación de una agenda de demandas hacia el Estado. En esa medida, es clave realizar estos procesos de consulta a la par de abordar las condiciones estructurales de pobreza y marginación que contribuyen a que el cultivo de coca - y su vinculación a la economía ilícita de drogas - sean opciones viables para la población Ashaninka del VRAEM.

En este escenario, la investigación “*Gobernanza indígena en contextos de economías ilícitas: el caso de las comunidades Ashaninkas del VRAEM*” (Pastor, 2021), financiada por el Concurso Anual de Investigación del CIES 2020, buscó explorar cómo es que la población Ashaninka del VRAEM percibe y da sentido a su participación en la economía cocalera. Si bien existe una creciente literatura que plantea los daños y amenazas que genera la ampliación de la frontera cocalera sobre zonas de conservación y reservas Indígenas¹², relacionados con el impacto a los recursos naturales y la emergencia de actores armados que presionan por el territorio, buscamos entender cómo es que se experimenta este proceso desde el punto de vista de la

¹² Ver por ejemplo Dávalos et al., 2009; Devine et al., 2021; Wrathall et al., 2020

población Ashaninka, y cómo es que negocian su participación en una actividad fuertemente vinculada a las actividades ilegales y actores armados.

Para algunas familias Ashaninkas, la economía cocalera es considerada como una estrategia productiva que posibilita mantener su economía de subsistencia y, al mismo tiempo, integrarse a dinámicas comerciales y las emergentes aspiraciones de consumo. En el caso específico de las mujeres cultivadoras, ven a los cultivos de coca como una estrategia para lograr sus aspiraciones de buscar la educación superior de sus hijos(as), así como garantizar sus labores de cuidado en el hogar respecto a la salud y la alimentación. Para las mujeres viudas o separadas, la economía cocalera es una forma de generar ingresos económicos para sus familias sin depender de las actividades productivas y decisiones de un hombre. De acuerdo a los hallazgos, los cultivos de coca se adaptan a los cambios ecológicos de su entorno (la erosión de los suelos, la baja productividad de cultivos como el cacao y café, y la aparición de plagas); se adaptan a las dinámicas de diversificación de cultivos realizadas por las comunidades Ashaninkas como estrategia para garantizar ingresos monetarios y reducir riesgos ante las variaciones de precios de los otros cultivos; por último, son rentables aún en pequeña escala, ya que tiene niveles altos de productividad y genera de tres a cuatro cosechas anuales, posibilitando la fluidez de dinero.¹³

Durante su participación con la economía cocalera generan diferentes interdependencias con actores foráneos, quienes muchas veces se dedican a actividades ilegales. Ante ello, a nivel de comunidad se despliegan un conjunto de estrategias que definen qué es lo tolerable y lo que no de su involucramiento en la cadena productiva de drogas. Estas estrategias implican imponer límites sobre la cantidad de coca que se cultiva por cabeza familiar (1 hectárea a menos), imponer reglas para autorizar o prohibir el ingreso de foráneos a sus territorios, y realizar un trabajo de concientización hacia los más jóvenes para disuadir que se involucren en actividades ilegales. Sin embargo, las comunidades tienen una serie de desafíos para ejercer estos mecanismos que están relacionados a: i) la capacidad de los líderes comunitarios de ejercer su liderazgo, imponer sanciones y delegar responsabilidades¹⁴; ii) la extensión territorial de la comunidad, se identifica que comunidades con mayores extensiones tienen más

¹³ Estas características son similares a las que reportan otros estudios sobre cultivos ilícitos en diferentes partes del mundo (Gutierrez, 2020).

¹⁴ Este elemento también es discutido como un factor importante para explicar la resistencia de comunidades Afrocolombianas a la expansión del cultivo de coca en sus territorio (Lobo y Vélez, 2020)

dificultades para una vigilancia y control social más cotidiano; iii) las amenazas que reciben los líderes indígenas por parte de actores ilegales; y iv) la lenta y ambigua atención de las entidades estatales respecto a la seguridad territorial de las comunidades indígenas.

Precisamente, en el paper final de este Proyecto “*Amazonian indigenous livelihoods and the expansion of the illegal agricultural frontier*” (Paredes y Pastor, forthcoming), profundizamos las implicancias que tiene la ampliación de la frontera cocalera en las comunidades Ashaninkas del VRAEM. En específico, el objetivo es comprender cómo tanto el involucramiento a la economía cocalera como el acercamiento a las agencias estatales de control de drogas viene generando cambios en las dinámicas políticas indígenas locales. Identificamos que para algunos comuneros y comuneras Ashaninkas, los convenios interinstitucionales firmados entre DEVIDA y los presidentes de sus federaciones regionales son experimentados con ambivalencia. Esto porque el rol de DEVIDA está asociado a, por un lado, la promoción de proyectos agroproductivos, y otro vinculado a la potencial erradicación de cultivos de coca. Ello no implica una oposición a las intervenciones públicas del Estado, sino una forma de buscar articular de manera más participativa tanto a las economías de mercado como a las decisiones políticas sobre su territorio.

Las comunidades Ashaninkas, si bien tratan de adaptarse del mercado ilícito de coca y, al mismo tiempo, negociar su participación en los proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno, ello no los exime de las vulnerabilidades a las cuales están expuestos al articularse a las economías productoras de drogas, y que el gobierno a través de sus diferentes entidades responsables, no atiende. En el caso específico de los líderes Ashaninkas, quienes tienden a oponerse públicamente a la presencia de foráneos que incentivan las actividades ilícitas en sus territorios y reciben amenazas por parte de estos actores ilegales, su acercamiento a agencias estatales de control de drogas los pone en una situación de mayor exposición a actos violentos por parte de estos actores ilegales. Por ello, las autoridades estatales deben tener en consideración que como parte del problema de los cultivos de coca subyace un asunto de seguridad humana y territorial. Si bien, la violencia no es inherente a las economías ilegales, si es un mecanismo empleado por los actores armados ilegales cuando hay competencia por el territorio (Durand-Martinez, 2015). En esa medida, estas intervenciones estatales de control de cultivos pueden tener ciertas consecuencias, muchas veces no buscadas,

sobre la población local y su convivencia con la economía ilícita, como profundizar su exposición a formas violentas de interacción. Sin abordar estos posibles efectos y sobre quiénes recaen los mayores costos, se aumentan las posibilidades de fragmentar a las organizaciones indígenas y limitar su capacidad de respuesta y resiliencia frente a los actores armados ilegales.

Reflexiones finales

La fórmula que ha seguido el gobierno peruano sustentada en campañas de erradicación y programas de desarrollo alternativo han tenido poco éxito en su objetivo de reducir la producción de hoja de coca destinada al mercado ilícito y entregar alternativas económicas a las familias rurales. La producción de coca-cocaína posibilita que territorios de la Amazonía peruana y sus residentes se integren a los mercados globales, accedan a sus medios de subsistencia, aspiraciones de consumo y, en algunos casos, movilidad social, en un contexto de oportunidades limitadas. Pese a ello, su participación en una economía fuertemente articulada a la ilegalidad conlleva a las posibilidades de ser erradicados por las autoridades estatales o a la aparición de actores armados no estatales que negocian el control territorial con los actores armados estatales.

En estas disyuntivas complejas¹⁵, los actores civiles tienen la capacidad de buscar renegociar las condiciones desigualdades de su participación en la política contra las drogas y redefinir los límites de su legalidad ante la presencia de actores y actividades ilícitas. Al mismo tiempo, en el caso peruano, han tenido serias limitaciones para abordar sus tensiones internas, las lógicas personalistas y clientelares que han caracterizado a los movimientos políticos subnacionales del país (Asencio, 2016; Paredes y Dosek, 2020), teniendo como resultado una débil agenda unificada en las últimas décadas (Durand-Ochoa, 2014). La presencia de actores políticos intermediarios en este nuevo escenario político, en donde el partido de gobierno tiene un plan que apoya la industrialización de la hoja de coca y tienen vínculos con los gremios cocaleros, principalmente del VRAEM, abre una nueva ventana de oportunidad para plantear el debate en la agenda pública. Sin embargo, consideramos que, si bien esta es

¹⁵ Término empleado por Gutierrez-Sanín (2021)

la zona con mayor producción de coca y con una organización social más sólida, el nuevo gobierno tiene que tener presente que existen 14 zonas cocaleras del país, cada una con diversos actores, muchos de ellos pueblos indígenas, que requieren también una apertura al diálogo respecto a este tema.

A partir de los aprendizajes del estudio, identificamos las siguientes reflexiones finales:

- La experiencia boliviana demuestra que para que alguna estrategia sea exitosa en términos de limitar el incremento del cultivo de coca y reducir los niveles de violencia y marginalización hacia la población cultivadora de coca se requiere trabajar con las organizaciones de base, no en contra de ellas. De manera que, es urgente que las autoridades del gobierno central estén abiertas a incorporar las visiones y demandas de las organizaciones sociales en diferentes etapas de la construcción de la política pública. Esto supone medidas como fortalecer la capacidad organizativa de los sindicatos cocaleros a nivel local, integrarlos en la toma de decisiones, y responder a las demandas respecto al empadronamiento de agricultores cocaleros a nivel nacional.
- Los resultados rápidos y enfocados en el cumplimiento de metas operativas de corto plazo, como la reducción de las hectáreas hoja de coca a través de la erradicación, debilita los esfuerzos estatales posteriores que buscan construir sistemas económicos alternativos a la producción de hoja de coca. Esto porque profundiza la desconfianza de la población hacia las entidades estatales y socava su legitimidad en el territorio.
- La complementariedad de las políticas es importante, pero debe pensarse con una mirada de largo plazo y no en función del cumplimiento de metas operativas como la erradicación de cultivos de coca. Además, las sinergias entre entidades gubernamentales es clave, dado que las mayores presiones a nivel local recaen sobre la agencia antidrogas DEVIDA, cuya matriz-operativa no necesariamente responde a las múltiples desigualdades que existen en las zonas productoras de coca. En esa medida, es urgente replantear el Desarrollo Alternativo en un contexto agrario nacional en crisis, y pensar en garantizar la seguridad alimentaria, generar mercados regionales en lugar de poner todos los esfuerzos en posicionar a las familias agricultoras en mercados internacionales con precios

altamente volátiles. Es necesario formular un ente coordinador que sea responsable de posicionar los productores agrícolas de estas áreas estratégicas.

- Pese a que existen importantes mercados regionales, la comercialización e industrialización de la hoja de coca se realiza principalmente por canales informales y no a través de la Empresa Nacional de la Coca. Esto se debe a que esta entidad no ofrece precios adecuados a los productores, en los últimos años registra pérdidas anuales que le han impedido comprar hoja de coca, pone muchas trabas burocráticas para los compradores de hoja de coca que buscan comercializar o industrializar, y no logra generar un posicionamiento de los productos en base a la coca en los mercados locales. Es necesario ampliar la participación de los productores de diferentes zonas cocaleras del país en el proceso de modernización de la ENACO.
- En estas áreas existen diferentes actores locales que configuran los escenarios políticos en los cuales se implementan las medidas del control de cultivos de coca. Estas intervenciones deben procurar que sus efectos – muchas veces no buscados – no recaigan sobre las poblaciones más vulnerables, ni dañen los ecosistemas. En ese sentido, se requiere priorizar considerar seriamente a las heterogéneas voces de las y los pobladores locales respecto a la economía cocalera a través de procesos participativos amplios y de largo plazo a nivel de zonas cocaleras y comunidades indígenas.

En líneas generales, urge repensar el abordaje a los cultivos de coca en el Perú más allá de la inercia institucional basada en acciones de erradicación y programas de desarrollo alternativo focalizado en cultivos de agroexportación. Tanto a partir de la literatura especializada¹⁶ como por los aprendizajes del Proyecto de Investigación, se concluye que la inercia puede romperse a través del abordaje de problemas estructurales respecto a la tenencia de la tierra individual y colectiva, la inversión social en áreas de salud, educación e infraestructura, así como el trabajo con organizaciones de base comunitaria. Estos elementos pueden contribuir a la construcción de formas más participativas para mejorar la calidad de vida de la población de las zonas cocaleras.

¹⁶ Ver (Dávalos, 2016; Dávalos y Dávalos, 2019; Sviatschi, 2018)

Referencias:

- Acero, C., Parada, M., y Machuca, D. (2019). La paz narcotizada: decisiones, presiones y diseño institucional del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. *Análisis Político*, 32(97), 114–135
- Acero, C., y Machuca, D. (2021). The substitution program on trial: progress and setbacks of the peace agreement in the policy against illicit crops in Colombia. *International Journal of Drug Policy*, 89, 103158.
- Alimi, D. (2019). An Agenda in-the-making: The Linking of Drugs and Development Discourses. *Journal of Illicit Economies and Development*, 1(1), 37–51.
- Asencio, Raúl H. 2016. Los nuevos incas: la economía política del desarrollo rural andina en Quispicanchis (2000–2010). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Brewer-Osorio, S. (2021). Turning Over a New Leaf: A Subnational Analysis of ‘Coca Yes, Cocaine No’ in Bolivia. *Journal of Latin American Studies*, 1–28.
- CAAP. (2021). Ucayali: Denuncian brutal ataque e intento de asesinato contra indígena cacataibo. Disponible en: <https://www.caaap.org.pe/2021/09/25/ucayali-denuncian-brutal-ataque-e-intento-de-asesinato-contra-indigena-cacataibo/>.
- Dávalos, L., Bejarano, C., y Correa, H. (2009). Disabusing cocaine: Pervasive myths and enduring realities of a globalised commodity. *International Journal of Drug Policy*, 20(5), 381–386.
- Davalos, E. (2016). New answers to an old problem: Social investment and coca crops in Colombia. *International Journal of Drug Policy*, 31, 121–130
- Dávalos, E., y Dávalos, L. (2019). Social Investment and Smallholder Coca Cultivation in Colombia. *The Journal of Development Studies*, 56(6), 1118–1140.
- DEVIDA. (2018). Estrategia Multisectorial Plan VRAEM 2021. Lima: DEVIDA
- DEVIDA. (2020a). Monitoreo de la Superficie Cultivada con Arbusto de Hoja de Coca en Producción – 2019. Lima: DEVIDA.
- DEVIDA (2020b). Informe sobre la Demanda de Hoja de Coca para fines Tradicionales e Industriales. Lima: DEVIDA.
- Devine, J. A., Wrathall, D., Aguilar-González, B., Benessaiah, K., Tellman, B., Ghaffari, Z., y Ponstingel, D. (2021). Narco-degradation: Cocaine trafficking’s environmental impacts in Central America’s protected areas. *World Development*, 144.
- DIRANDRO. (2020). Tendencias de las redes criminales del Tráfico Ilícito de Drogas. Lima: DIRANDRO
- Farthing, L., y Ledebur, K. (2015). *Habeas Coca: Bolivia’s Community Coca Control*. Open Society Foundations Report.

Farthing, L., y Ledebur, K. (2017). Desarrollo integrado con coca en el Estado Plurinacional de Bolivia: de la erradicación a la mitigación de la pobreza. Boletín de Estupefacientes, LXI(1), 145-174.

Ferreira, F. (2016). De-demonizing the VRAEM: A peruvian-cocalero area. *Substance Use and Misuse*, 51(1), 41–53.

Grillo, L., Kendra, A., Pastor, A., & Manrique, H. (2021). Addressing Socio-Environmental Challenges and Unintended Consequences of Peruvian Drug Policy: An Analysis in Two Former Cocalero Valleys. *Journal of Illicit Economies and Development*, 3(1), 1–21.

Grillo, L. (2018). Coca, café y cacao: lucha contra las drogas y estrategias de vida en agricultores del valle del Monzón. *Debates En Sociología*, 101-130e

Grisaffi, T., Farthing, L., Ledebur, K., Paredes, M., & Pastor, A. (2021). From criminals to citizens: The applicability of Bolivia's community- based coca control policy to Peru. *World Development*, 146, 105610.

Grisaffi, T. (2019). *Coca Yes, Cocaine No: How Bolivia's Coca Growers Reshaped Democracy*. Duke University Press.

Goodhand, J., Meehan, P., Bhatia, J., Ghiabi, M., & Sanín, F. G. (2021). Critical policy frontiers: The drugs-development-peacebuilding trilemma. *International Journal of Drug Policy*, 89, 103115.

Gutierrez, E. D. (2020). The paradox of illicit economies: survival, resilience, and the limits of development and drug policy orthodoxy. *Globalizations*, 17(6), 1008–1026.

Gutiérrez-Sanín, F. (2021). Tough Tradeoffs: Coca crops and agrarian alternatives in Colombia. *International Journal of Drug Policy*, 89.

Heuser, C. (2017). Después del auge: Campos de poder en el valle del Monzón. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*, 4(7), 105-132.

Heuser, C. (2019). The Effect of Illicit Economies in the Margins of the State – The VRAEM. *Journal of Illicit Economies and Development*, 1(1), 23–36.

INEI. (2019). Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo Tradicional de Hoja de Coca, 2019. Lima: INEI.

Koven, B., y Mcclintock, C. (2018). Violence in Peru. In H. Kassab y J. D. Rosen (Eds.), *Violence in the Americas*, pp. 47-70. Lexington Books.

Ledebur, K. y Grisaffi, T. (2019). Bullets in Lieu of Dialogue: Coca Eradication in Peru's Central Jungle. Disponible en: <https://research.reading.ac.uk/coca-cocaine-bolivia-peru/bullets-in-lieu-of-dialogue-coca-eradication-in-perus-central-jungle/>

Lobo, I., y Vélez, M. A. (2020). From strong leadership to active community engagement: effective resistance to illicit economies in Afro Colombian collective territories (No. 3; Issue 3)

Marín, M., Machuca D., y Acero, C. (2020). El PNIS en terreno: voces del campesinado cocalero.

Mendoza, W., & Leyva, J. (2017). La economía del VRAEM. Diagnóstico y opciones de política. USAID y CIES.

Nacimiento, M. (2016). Inercia y resistencia al cambio en las políticas de drogas : El caso. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*, 3(5), 39-58.

Parada, M., & Marín, M. (2021). Cocalero women and peace policies in Colombia. *International Journal of Drug Policy*.

Paredes, M. (2019). Conflictos mineros en el Perú: entre la protesta y la negociación. *Debates En Sociología*, (45), 5-32.

Paredes, M. and Došek, T. (2020) “The Subnational Indigenous Quota in Peru: The Paradoxes of Political Representation,” *Latin American Politics and Society*. Cambridge University Press, 62(3), pp. 123–148.

Paredes, M., y Pastor, A. (2021). Erradicación en Suspensión. La Dimensión Simbólica de la Pacificación Negociada en el VRAEM. *Revista de Ciencia Política (Santiago)*, 41(1), 163–186.

Ponce, A. (2016). From Freedom To Repression and Violence: The Evolution of Drug Policy in Peru. In B. C. Labate, C. Cavnar, y T. Rodrigues (Eds.), *Drug Policies and the Politics of Drugs in the Americas*, pp. 123–148.

Proetica. (2021). Un mapeo de actores. La trata de personas y la corrupción en el contexto del narcotráfico y la pandemia del Covid-19 en el Trapecio Amazónico. Lima: Proetica.

Salisbury, D. y Fagan, C. (2013). Coca and conservation: cultivation, eradication, and trafficking in the Amazon borderlands. *GeoJournal*, 78(1), 41-60.

Scott, J. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.

Sviatschi, M. (2018). Making a Narco: Childhood Exposure to Illegal Labor Markets and Criminal Life Paths. Princeton University Disponible en: <http://www.micaelasviatschi.com/wp-content/uploads/2019/02/jmp37.pdf>.

UNODC. (2005). Monitoreo de Cultivos de Coca. Perú 2004. Lima: UNODC.

UNODC. (2018). Monitoreo de Cultivos de Coca. Perú 2017. Lima: UNODC.

UNDP. (2019). *Development Dimensions of Drug Policy: Innovative Approaches*.

UNODC. (2021). *World Drug Report 2021*. Viena: UNODC.

van Dun, M. (2012). The drugs industry and peasant self-defence in a Peruvian cocaine enclave. *International Journal of Drug Policy*, 23(6), 442–448.

van Dun, M. (2014). Exploring Narco-Sovereignty/Violence: Analyzing Illegal Networks, Crime, Violence, and Legitimation in a Peruvian Cocaine Enclave (2003-2007). *Journal of Contemporary Ethnography*, 43(4), 395–418.

Wrathall, D. J., Devine, J., Aguilar-González, B., Benessaiah, K., Tellman, E., Sesnie, S., Nielsen, E., Magliocca, N., McSweeney, K., Pearson, Z., Ponstingel, J., Sosa, A. R., y Dávila, A. (2020). The impacts of cocaine-trafficking on conservation governance in Central America. *Global Environmental Change*, 63(April), 102098

Zegarra, E. (2021). Hora de enfrentar en Perú dos crisis silenciosas: agro y la alimentación. Disponible en: <https://www.nodal.am/2020/07/hora-de-enfrentar-en-peru-dos-crisis-silenciosas-agro-y-la-alimentacion-por-eduardo-zegarra/>.